

Director,

Nicolás Victoria J.

EL COMBATE

SEMANARIO POLITICO

Administrador,

Ismael G. de Paredes

*** Cedemos hoy con placer las columnas editoriales de EL COMBATE al artículo que se leerá en seguida, obra de un ilustrado colaborador.

El Protectorado de Norte América

Los juicios que se han emitido erradamente y por la prensa acerca de la intervención de los Estados Unidos en la República de Panamá, nos inducen a manifestar nuestra propia y personal opinión en ese delicado é importante asunto, porque consideramos que ni nuestros más ilustrados y eminentes juristas ni nadie le han dedicado hasta ahora la atención que merece; no se ha estudiado con el juicio, la calma y el celo que requiere para poder fijar el alcance y la verdadera significación que en la actualidad tiene el protectorado que ejerce la Gran República del Norte sobre nosotros. Está falta de análisis ha dado origen y hace mantener un criterio que no tenemos embarazo en calificar como erróneo, el cual expone todavía a nuestros compatriotas los panameños a sorpresas dolorosas, como si no fuéramos bastante las que hemos experimentado con motivo de graves y recientes sucesos.

Queremos definir, según nuestro propio concepto, la actitud que el Gobierno de los Estados Unidos ha asumido en sus relaciones políticas con la República de Panamá y juzgaremos brevemente la conducta de ese Gobierno, sin pretender abarcar la cuestión de Derecho internacional que tales relaciones envuelven, cuestión vasta y compleja, que exige tiempo y espacio, de que por hoy no disponemos, para dilucidarla plenamente. Pero nuestro trabajo acaso estimule el labor intelectual y el patriotismo de unos mejor preparados, que están en capacidad de desarrollar el tema con maestría é indicar los derroteros más seguros para lograr que el protectorado de los Estados Unidos favorezca los intereses de un círculo ó de un partido de esta República, sino, la República misma, ya que ésta ha aceptado de buen grado la condición de pupila de aquella gran nación, buscando en la tutela una influencia fecunda en bienestar y progreso.

**

Nosotros reconocemos gustosos que la conducta de los Estados Unidos favoreció de modo eficaz nuestra independencia y que por la voluntad de aquel poderoso pueblo la soberanía de nuestra República se halla firmemente asegurada contra la codicia y las tendencias absorbentes ó expansivas de cualquiera nación, ya sea de éste ó de otro continente; le consideramos por lo tanto á nuestra gratitud y se la tributamos sin reserva en nuestra capacidad de panameños. Eso no obsta, sin embargo, para reconocer imparcialmente que los Estados Unidos no hicieron ni tienen en mira al dispensarnos su protección sino su propio y exclusivo beneficio. Si el desarrollo de sus intereses comerciales y políticos no dependieran en cierto modo de nuestra existencia como pueblo autónomo, poco ó nada les importaría que continuásemos unidos el carro desventado y abrumador de Colombia; y así por que los panameños no gozásemos de la ventajas de la independencia, los ditirambos de Mr. Root, secretario de la buena voluntad de los Estados del Norte para las Repúblicas hispanoamericanas habrían sido menos expresivos en el Congreso de Río Piedra, en alabanza del progreso material y político de esas Repúblicas; y si la loa destinada en particular á Colombia, si el distinguido estadista americano resuelve visitarla, sería menos elocuente y calurosa.

La historia política de los Estados Unidos nos enseña cuán intenso es en ese pueblo el sentimiento de su bienestar propio, y cuánto es la diligencia y la energía que despliega para aumentar su prosperidad y fomentar sus intereses. Así á través de los siglos y por medio de la guerra y la paz, ha ido formando una política de expansión que ha llevado a los Estados Unidos a ocupar territorios en América del Norte, en el Pacífico y en Asia, y a establecer una influencia creciente en Europa y África.

ta, en sus relaciones con los demás países, ha sido siempre su propia y exclusiva conveniencia.

Nuestra afirmación no implica animosidad contra el pueblo ni el Gobierno de los Estados Unidos, de quienes somos admiradores fervientes; es sencillamente la expresión de un juicio sereno, que aprecia los hechos con exactitud para deducir consecuencias legítimas. Para demostrar nuestro acierto—tomando las cosas en su principio es la ocasión—de examinar qué es la doctrina Monroe, qué causas le dieron origen y á qué tendencias sirven.

Los principios establecidos por Mr. James Monroe, quinto Presidente de los Estados Unidos, se condensan en estas dos prohibiciones hechas á los Estados europeos: primero no pretender colonizar ninguna parte de la América; segundo, no extender á ninguna de estas regiones el sistema político de aquellos Estados. Esa última admonición fue dirigida á la Europa con motivo de los planes que acariciaba la Santa Alianza, revelados en los Congresos de Troppau y de Verona, de ayudar á España á recuperar sus antiguas colonias de América, y también para tratar de contener á Rusia en sus propósitos de dominación en Alaska.

A esos principios que constituyen la doctrina de Monroe no les han dado los norteamericanos otra razón justificativa, teórica y prácticamente, que la expredada por su autor en su célebre Mensaje al Congreso de 1823, en el cual dijo: "Con los movimientos de este hemisferio nos hallamos necesaria é inmediatamente ligados, por causas que son obvias para todos los observadores ilustrados é imparciales. . . . Es imposible que las potencias europeas extiendan su sistema político á alguna parte de cualquiera de estas regiones sin que ello ponga en peligro nuestra paz y nuestra felicidad."

La declaración es concluyente y debe servir á los pueblos hispanoamericanos para conocer con exactitud el móvil que impulsa á la gran República anglosajona ó escudarlos y protegerlos contra la rapacidad y pretensiones ambiciosas de algunos Estados europeos. No es abnegación, fraternidad, amor á la causa de los pueblos débiles y oprimidos; es la voluntad inquebrantable y enérgica del pueblo norteamericano de alejar de este continente toda causa de peligro para su bienestar de pueblo libre y satisfecho, todo motivo próximo ó remoto de perturbación en el tranquilo ejercicio y próspero desarrollo de sus casi perfectas instituciones.

La invocación de la doctrina Monroe unas veces, como en el caso de la efímera Monarquía de Maximiliano, en México, y en el de las pretensiones de la Gran Bretaña para ensanchar la Guayana inglesa usurpando territorio á Venezuela; y el abandono de ella en otras situaciones que la hacían de aplicación forzosa, como cuando España se adueñó de la República de Santo Domingo por la traición del Presidente Pedro Santa Ana, en 1861, y la mantuvo nuevamente en condición de colonia durante cuatro años, son hechos que atestiguan que la comentada doctrina no es propiamente sino regla de conducta que los Estados Unidos han adoptado para servir especialmente sus intereses. Para ellos son cosa secundaria los beneficios y los perjuicios que las demás Repúblicas americanas puedan derivar de los actos que ellos ejecutan en defensa de su propia seguridad y de lo que ellos estiman sus derechos.

La historia suministra ejemplos de la verdad de ese juicio. Los Estados Unidos ayudaron poderosamente en 1836 á la emancipación del Estado de Texas, que era parte integrante de la Unión Mexicana, violando de modo flagrante sus deberes internacionales con esa nación amiga y vecina de ellos.

La conducta de Estados Unidos hirió tan hondamente el sentimiento de los mexicanos, que más tarde, en 1845, cuando se llevó á efecto la anexión de Texas, como un nuevo Estado de la Unión Americana, quedaron rotas las relaciones entre los dos países, y la guerra civil que se siguió, que terminó en un tratado, en virtud del cual los Estados Unidos adquirieron

dueños no sólo de Texas, sino también de los Estados de Nuevo México y California, mediante una indemnización de quince millones de pesos, que pagaron á México.

En 1856 el Gobierno de Washington dió su beneplácito ostensible á la audaz usurpación de William Walker, en Nicaragua, país del cual se apoderó ese arquetipo de aventureros, sin más títulos que su arrojo y su ambición; y no reconocieron los Estados Unidos oficialmente el gobierno de aquel filibustero, precariamente afortunado, por respeto á la Gran Bretaña.

En época mucho más reciente los Estados Unidos despertaron en los pueblos de América los más efusivos sentimientos de gratitud y simpatía por su intervención armada en favor de los cubanos, empeñados en guerra larga y sangrienta contra el poder español, del cual al fin se emanciparon, merced á aquella eficaz intervención. Pero el Gobierno de los Estados Unidos no obró tampoco en esa emergencia por sentimentalismo, ni porque diese gran mérito al reconocimiento del pueblo libertado y de sus hermanos del continente. El Presidente Mc. Kinley, en un Mensaje al Congreso Americano, declaró con serenidad olímpica cuál era la razón decisiva que impulsaba á su nación á intervenir: "Porque el estado de cosas presente en Cuba,—dijo—es una amenaza perpetua para nuestra paz é impone este á nuestro Gobierno enormes gastos por el conflicto que se libra en una isla tan cercana á nuestras costas y con la cual tiene nuestro pueblo muy valiosos tráfico y relaciones mercantiles; cuando por tal causa la vida y libertades de nuestros ciudadanos están en peligro constante, sus propiedades destruidas y arrojadas á la ruina, en donde las naves mercantes están expuestas á la captura y se les apresa á nuestras puertas por naves de guerra de nación extranjera, cuando carecemos de poder para impedir las expediciones filibusteras que llevan á irritar las diferencias y á producir nuevas querellas."

Bastan los acontecimientos que hemos rememorado para que conozcamos bien los panameños cuál es el temperamento, el modo de ser del pueblo que desde Noviembre de 1903, por virtud de las circunstancias y por nuestra voluntad, es—y lo será de modo perpetuo—nuestro protector y conviviente.

La investigación que hechos de esos antecedentes son un deber elemental de cordura y de prudencia para nosotros, porque tanto los Estados como los individuos necesitan aprender á juzgar con exactitud las cualidades y el carácter de sus amigos y vecinos, con mayor razón si éstos son sus coparticipes en cosa común ó sus aliados.

**

Efectuado ese examen previo, entremos á considerar el punto principal de la cuestión, esto es, las relaciones políticas establecidas entre los Estados Unidos y Panamá.

Por el artículo I del tratado Hay-Bunau-Varilla, suscrito en Washington el 18 de Noviembre de 1903, los Estados Unidos contrajeron la obligación de garantizar y mantener la independencia de la República de Panamá, y por el artículo VII del mismo tratado aquella nación adquirió el derecho de mantener el orden público en las ciudades de Panamá y Colón y sus territorios y bahías adyacentes, en caso de que á juicio de los Estados Unidos la República de Panamá no pueda mantenerlo.

No es nuestro propósito detenernos en lo relacionado con la garantía que se nos concedió por el artículo primero de la convención citada, porque éste se refiere de modo evidente á la protección que los Estados Unidos han de darnos contra toda agresión de poder extraño que atente contra nuestra independencia y soberanía; es una estipulación que mira exclusivamente á nuestras relaciones con los demás países y destinada á producir efectos únicamente en lo exterior. En el artículo VII, que se refiere únicamente con nuestros asuntos internos, acerca de esto, es fácil observar que en tanto que

la protección y mantenimiento de nuestra soberanía es una obligación de forzoso cumplimiento para los Estados Unidos, el mantenimiento del orden público en nuestros dos ciudades principales y sus territorios adyacentes es un derecho potestativo de esa Nación, que puede ejercitar ó no, según le venga en grado. Ese derecho es de la misma naturaleza que el que otorgó la República de Panamá á los Estados Unidos, por acto unilateral, consignado en el artículo 136 de nuestra Constitución, que estudiaremos más adelante, según el cual los Estados Unidos pueden intervenir, no ya solamente en los lugares que señala el tratado, sino en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiere sido turbado.

Siendo así, teniendo los americanos la facultad discrecional de intervenir en nuestra República para restablecer la paz y el orden públicos cuando sean alterados, creemos que nadie debe discrepar en la convicción de que el Gobierno americano hará uso de esa facultad solamente en los casos en que juzguen que las turbulencias y desórdenes, considerados como posibles entre nosotros, afecten ó amenacen de algún modo sus intereses en el Istmo. Cuando no corran peligro esos intereses, bien podremos devorarnos unos á otros con libertades los panameños, sin que los rubios hijos del tío Samuel se molesten en acudir á hacernos, recobrar el juicio y el amor al prójimo.

Aunque todo autoriza á pensar de ese modo, como se trata de las manifestaciones internas de nuestra vida como pueblo libre y es preciso saber á qué atenerse, algunos hombres públicos de Panamá han indagado directamente del Gobierno de Washington cuál será su actitud en el caso de que el país se vea agitado por graves conflictos domésticos. Así lo hicieron los ciudadanos que componen el Directorio Nacional del Partido Liberal en el mes de Noviembre de 1905, con ocasión de la visita á este país del señor William H. Taft, Secretario de Guerra de los Estados Unidos, en momentos en que el círculo que gobierna alardeaba de contar con el apoyo americano para sofocar todo acto extremo de protesta contra los abusos y arbitrariedades oficiales anunciados con motivo de las próximas elecciones. En su repuesta, comunicada el mes siguiente, por conducto de Mr. Elihu Root, Secretario de Estado, declaró sin ambigüedades el Gobierno americano, que "los Estados Unidos ejercerían sus derechos conforme al tratado para mantener el orden en Panamá y Colón y la Zona del Canal y no permitirían ninguna turbación de la paz y el orden de esas ciudades ni del territorio en que podían intervenir según el pacto, y que no irían más allá de los derechos adquiridos por el mismo tratado."

Hasta esa época el Gobierno Americano no parecía haber parado mientes en las facultades que espontáneamente le ha otorgado la nación panameña en el artículo constitucional que dejamos citado; y si acaso había reparado en esa autorización, graciosamente concedida, la desdénaba aparentemente, no creyendo quizá posible que llegase el caso de usarla para proteger los trabajos de construcción del canal y los demás intereses americanos.

Pero como la declaración de Mr. Root parecía soltar las ligaduras puestas al pueblo panameño por el artículo de la Constitución, de que hemos hecho mérito, los que están empeñados en mantener el orden de cosas existente en el Istmo vieron en esa declaración un gravísimo peligro y, como es lógico suponerlo, se empeñaron en obtener del Gobierno americano que revocase su decisión, recordándole el derecho que le ha conferido la Constitución panameña para intervenir en cualquier punto de la República. Esos señores, que son hábiles y prácticos para hacer triunfar sus propósitos—á todo señor todo honor—debieron indudablemente hablar á los americanos el único lenguaje que ellos entienden, el de su propia utilidad, y para hacerse oír, para hacer llegar á la Casa Blanca sus argumentos y demostraciones, se vi-

lieron de conductos adecuados y de medios eficaces.

Ya se sabe que M. Shont y Mr. Stevens, miembros de la Comisión Istmica del Canal, manifestaron á su gobierno que una insurrección en la República de Panamá, por lejano que sea el punto donde obre, entraba en los trabajos del canal, haciendo sentir sus efectos en la zona sometida á la jurisdicción americana; y no cabe dudar que otros personajes prominentes, que tienen acceso á las Secretarías de Estado en Washington, emitirán también concepto oficioso en idéntico sentido, y harían entender que Panamá se hallaba en vísperas de una tremenda convulsión intestinal.

Tal fue la causa de que cuando nadie, excepto los iniciados en la secreta urdimbre, esperaba que el gobierno americano hablase de los asuntos de Panamá, porque había razón para considerar dicha toda su palabra, Mr. Root y Mr. Taft sorprendieron al mundo dando instrucciones á Mr. Magoon, Gobernador de la Zona y Ministro Plenipotenciario en nuestra República, para que cooperase con las tropas americanas á sofocar la supuesta inminente rebelión, á la primera insinuación del Presidente Americano.

En la comunicación de Mr. Taft y en otra que éste acompañó, dirigida á él por M. Root, se diserta ya sobre la autoridad que la Constitución panameña ha conferido á los Estados Unidos para restablecer la paz pública en nuestra nación, cualquiera que sea el lugar donde se altere, y con una lógica extraña se da por probado un hecho antes de que suceda, esto es, que una insurrección en cualquier punto de esta República no puede menos que turbar la paz y el orden en las ciudades de Panamá y Colón, en la Zona del Canal y en sus vecindades, y así aparece otra vez el nervio de la acción americana—que cualquiera agitación, por distante que sea el sitio en que se produzca, pondría en peligro los intereses y propiedades de los Estados Unidos.

Nosotros no entramos á discutir si esa inducción es aventurada, ni si la determinación final del Gobierno americano respecto de su intervención en nuestros asuntos domésticos dependerá ó no para ser justificada, los fundamentos de la experiencia; lo que sí sostenemos es que habiendo los Estados Unidos aceptado ya expresamente la facultad emanada de nuestra Constitución para intervenir en nuestras contiendas internas, están en el deber de estudiar con madurez la extensión y el alcance de esa facultad y el modo como razonablemente debe ser ejercida.

**

El artículo 136 de nuestra Constitución dice textualmente:

"El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella Nación asumiere, ó hubiere asumido, la obligación de garantizar la independencia y soberanía de esta República."

Basta pequeño esfuerzo de la atención para descubrir que la facultad concedida por la Constituyente á la República de Panamá tiene por objeto no una sola cosa, sino dos: restablecer la paz pública y restablecer el orden constitucional. *Paz pública* y *orden público* pueden tomarse como expresiones sinónimas ó equivalentes, pero *orden constitucional* no es lo mismo que *orden público*, en el sentido que tiene universalmente este último término y que tiene en el artículo VII del tratado Hay-Bunau-Varilla un modo que *paz pública* expresa una idea y *orden constitucional* expresa otra. *Orden constitucional* no es sino *orden político*, es la conformidad absoluta con la Constitución, el equilibrio exacto y normal funcionamiento de las instituciones, el cumplimiento estricto de las reglas que establecen las relaciones de un gobierno con sus gobernados y las de los poderes públicos entre sí, el respecto y protección á los derechos primordiales garantizados á los ciudadanos.

Mr. Taft y Mr. Root han confundido y evidenciado las palabras y sentido de una de las ideas de la Constitución, y así, y con los mismos argumentos y demostraciones, se vi-

Tratado con Colombia

Se avecina ya el arreglo de la desavenencia entre Colombia y la República de Panamá; desavenencia que como es sabido, surgió el 3 de Noviembre de 1906, con nuestra incurrir en cesión. Una Junta de Comisionados de los Departamentos de aquel país y algunas Municipalidades urgen al Gobierno del General Rafael Reyes el arreglo de ese asunto, y su Ministro de Relaciones Exteriores, en telegramas circulares á los Gobernadores (del 14 de Agosto de 1905) dice: "En tratado para terminar asunto Panamá, Gobierno no tendrá en cuenta peticiones de Comisionados de los Departamentos y Municipalidades, y sobre todo honor nacional. Recabaré, entre otros privilegios, libres comercio y tránsito por el Istmo y el Canal, rechazando toda indemnización de dinero como indecorosa. . . . Tratado someterá al Cuerpo Legislativo para que él decida en definitiva."

Dadas las pretensiones de Colombia, ó sean sus condiciones para reconocer nuestra independencia y soberanía,—comercio libre y libre tránsito por el territorio istmeño—recordamos en seguida haber aprobado la Convención Nacional de 1904 una ley de autorizaciones al Poder Ejecutivo Panameño (la 65) la que en su artículo 49 dice:

"El Poder Ejecutivo podrá celebrar tratados con la República de Colombia, que serán tenidos como leyes siempre que en ellos se reconozca, por parte de esta última, la soberanía é independencia de la de Panamá y que no se ceda parte alguna de territorio que por leyes correspondieron al extinguido Estado de Panamá."

¿Hay conveniencia para el pueblo istmeño en que subsista esa autorización?

Cuestión es esta que proponemos solamente, por ser cuestión de familia á los panameños de nacimiento y más especialmente á los que lo son, nombrados Diputados á la Asamblea Nacional reunida hoy; pues los istmeños nativos somos los que tenemos que pensar y resolver la cuestión con Colombia con sincero patriotismo, y con el mismo que—según frase de M. A. Caro—los antiguos romanos expresaron mejor, porque mejor debieron sentirlo, apellidándolo "caridad de la Patria."

En Colombia, sometida en la actualidad á la Dictadura, el ó los tratados que se celebren con Panamá serán sometidos al Cuerpo Legislativo, para que decida en definitiva; y en la República de Panamá,—con tal que en ellos se reconozca la soberanía é independencia nuestra y no se ceda parte alguna de territorio,—serán tenidos como leyes, aunque en esos tratados se pacte el libre comercio, que será la ruina de nuestros industriales, el libre tránsito de los colombianos por territorio panameño, que será perjudicial á nuestra soberanía, y se acepte una proporción inequitativa, por parte de Panamá, en la Deuda Externa de Colombia.

El redactor de *La Estrella de Panamá*, D. Federico Mora, creemos, que como extranjero piensa y escribe sobre el particular con positiva imparcialidad é ingenuidad, dijo en fecha reciente (26 de Agosto) lo que insertamos á continuación:

En un proyecto titulado: *Bases para un convenio honroso entre el Gobierno de Colombia y los Gobiernos de Estados Unidos y Panamá*, proyecto que publica *El Porvenir* de Cartagena, vemos con sorpresa los siguientes artículos:

"Quinto. El Gobierno de Colombia reconoce la soberanía é independencia de la República de Panamá, con los límites reconocidos al antiguo Departamento de Panamá desde 1857 hasta 1902.

Sexto. El Gobierno de Panamá debe comprometerse á reconocer y pagar la parte proporcional de la deuda exterior que le corresponde como parte integrante que fue de la Gran Colombia.

"Séptimo. El Gobierno de Panamá debe comprometerse á recibir en su territorio, sin derecho alguno, los productos colombianos."

Por lo que hace al pago de la parte proporcional que le corresponda á Panamá en la deuda exterior, como parte integrante que fue de Colombia, hay antecedentes que se oponen á esta teoría—y el más reciente fue la negativa de Cuba á reconocer la deuda francesa que España había contraído para hacer mejoras en dicha Isla. Pero nosotros creemos conveniente que esta República reconozca esa parte proporcional de la deuda exterior, porque este hecho demostraría las buenas disposiciones de Panamá hacia Colombia y

sería subyugar por la misma los que tienen en sus manos la facultad y el deber de hacer progresar una Nación necesitan poseer cualidades y condiciones pocos comunes, sin las cuales es moralmente imposible hacer nada duradero, útil y bueno.

Ya que los actuales Diputados, con algunas excepciones, no reúnen los requisitos indispensables que debe poseer todo legislador, deben propender, por lo menos, á legitimar su elección y á ocultar su falta de competencia procediendo con cordura y sensatez. Para ello bastan carácter, honradez y patriotismo, factores con los cuales el hombre puede convertir en labor sencilla la más compleja labor y ejecutar actos benéficos á despecho del mezquino interés y de las bastardas pasiones.

No nos cansaremos de repetirlo: á pesar de lo que hemos visto y venimos viendo todos los días no pensamos nosotros, como piensan algunos, que toda esperanza de alcanzar la tan deseada corrección administrativa debe desaparecer. Mejor que llorar sin consuelo, como solía hacerlo el Profeta, es luchar en favor de la buena causa y perseverar en los propósitos de tener fé y de trasmitirla á los que de ella han menester. Dentro de poco será fruto sazonado lo que los olímpicos hoy desprecian como *materia acerba y desabrida*.

Los Diputados panameños, si son hombres honrados y de buena fé, no pueden negar que la actual administración sintetiza el derroche de los caudales públicos, proteje el peculado, estimula la ineptitud y se cede con la impunidad; no pueden tampoco olvidar que son ellos los que obligados están, no á sentarse á la vera del camino á mirar con impasible desdén el desfile de la impudencia, sino á ponerle coto al desbarajuste administrativo y á la descarada imposición que tiene por objetivo único la continuación de la hasta ahora consentida iniquidad.

En las obras públicas es en lo que más deben fijarse los Diputados, porque ha sido á la sombra de ellas que el Gobierno ha cometido las mayores transgresiones. Interrogando los Diputados al Gobierno lo que ha hecho y está haciendo al respecto, pueden convencerse los Diputados de que el Gobierno no sabe lo que está haciendo ni lo que ha hecho, y podrán, por lo mismo, ejercer desapasionadamente la censura del caso.

En todos los pueblos de la tierra el progreso material produce beneficios en el orden moral; *eleva y dilata á un mismo tiempo*. Sólo entre nosotros ha tomado el Gobierno por pretexto el progreso material para debilitar los caracteres y corromper los corazones. Es doble la falta cometida y así mismo ha de ser doble el esfuerzo que hay necesidad de hacer para extirpar el mal. Y puesto que nada nos prepara tan bien para entender un asunto como hacernos cargo de su propia naturaleza, queremos decir hoy, cometiendo como de costumbre las indiscreciones de la verdad, que nada mejor pueden hacer los Diputados que investigar y escrutar los actos y procederes de la Secretaría de Fomento. Por más sutilezas que aduzca el Gobierno, por más maravillas de ingenio que emplee el señor Secretario y por más adusto que sea el ceño de los usufructuarios enfreídos, nada de ello logrará jamás demostrar que allí existe otra cosa que lo que todo el mundo ve por las claraboyas que ha abierto la codicia.

Podríamos hacer hoy una relación de la no interrumpida serie de desaciertos y de abusos consumados por el Gobierno, so pretexto de obras públicas, pero preferimos por ahora callar para sorprender más tarde á los legisladores, imitando de ese modo la conducta de aquel famoso artista de la antigüedad, que tuvo la feliz idea de cubrir con un velo la cabeza de Agamemnon para dejar comprender al público el exceso de tristeza que le daba fisonomía melancólica al rostro.

Entre las primeras necesidades de la República contamos nosotros y nos atrevemos á aconsejarlas á la Asamblea, de manera especial, la fundación de establecimientos penales con organización científica en concordancia con el Artículo 45 de la Constitución y la organización de un Cuerpo de Policía *dedicado exclusivamente* á la satisfacción de las exigencias urbanas de ciudades como Panamá, Colón y Bocas del Toro.

Plegue el cielo que los Diputados á la actual Asamblea, al regresar á sus hogares, no tengan el *triste placer* de decir con Núñez de Arce: "En las Cortes voté siempre con mi partido, si no siempre convencido, siempre disciplinado." No, los Diputados panameños en circunstancias como las actuales y cuando se *lleva nacionalizando las aguas* no deben sombar otra vez una *luz* al tiempo de salir de la Patria.

nes por el odio ó por el desprecio. El Gobierno americano no podrá dominar semejante estado de cosas, sino á costa de grandes sacrificios, por poderosos que sean los recursos con que cuente.

Y en cuanto á la objeción de que inmiscuyéndose en los actos internos de nuestro Gobierno, para corregir sus faltas y trasgresiones el Gobierno americano atentaría contra la soberanía de esta nación, replicamos, fundados en las premisas que dejamos sentadas, que el reparo no tiene cabida, porque es un extraño modo de entender y respetar la soberanía de un pueblo en que impera el sistema republicano, retroceder ante toda amistosa amonestación á sus gobernantes, esto es, á los que no son sino representantes ó *mandatarios* de ese pueblo, según el principio jurídico de la *delegación*, y sin embargo hacer preparativos belicosos para intervenir en las luchas internas poniéndose resueltamente del lado de esos gobernantes contra el pueblo mismo, que es en quien reside la soberanía y quien confiere el mandato para gobernar, conforme á doctrinas que son hoy ya dogmas del derecho público.

Conviene decir todo esto á los Estados Unidos empleando en primer término el argumento de su propia conveniencia y beneficio, que es el único capaz de producir impresión en su ánimo.

Todo lo que dejamos expuesto debe convencerlos, pues, de que es inútil y es pueril en los ciudadanos que forman las apretadas filas de la oposición elevarse en són de queja al Gobierno americano por los ataques, arbitrariedades y actos crueles del Gobierno panameño; y que es asimismo soberanamente ridículo en los hombres que componen este Gobierno acudir, como acostumbran, á pedir la venia del Representante oficial de los Estados Unidos para actos y providencias que no afectan en lo mínimo á esa nación. Error grave padece quien se figure que colocado el Gobierno americano, en tiempo de paz, entre el pueblo y el Gobierno de Panamá, va á pronunciarse en favor de ninguno de los dos; para el uno y para el otro no tiene sino palabras de cortés deferencia, atento siempre á los hechos que pueden amenazar sus intereses y que requieran su decisión en el obrar.

El modo de ser de los Estados Unidos debe estimularnos á ser dignos y altivos. En ese país donde se enseña oficialmente á los ciudadanos, en las escuelas y en la política, el culto de la dignidad y de la independencia personal, que son fuentes de grandes virtudes cívicas y de prestigio nacional, en ese país, decimos, se desprecia á los que se humillan, á los que piensan adquirir méritos mostrándose serviles.

RAMÓN M. VALDÉS.

La Asamblea Nacional.

En obediencia á la manifiesta disposición constitucional inaugura hoy sus tareas ordinarias la primera Corporación pública del país.

Como es notorio, los Diputados actuales no son los designados por el voto popular en elección libre y, por consiguiente, están muy lejos de ser ellos los legítimos representantes de la Nación. Pero sea lo que fuere, hemos convenido en llamarlos Diputados y por lo tanto queremos dirigirnos á ellos en su carácter de legisladores de la República de Panamá.

Si sobre una Asamblea cualquiera pesan siempre grandes deberes y responsabilidades, sobre la actual esas responsabilidades y esos deberes son infinitamente mayores. En efecto, corresponde á esta primera Asamblea Legislativa expedir todas aquellas leyes que necesita la República para alcanzar progreso y bienestar efectivos; y cuando decimos progreso, queremos referirnos, no á la fórmula de Pelletan, que consiste en el acrecentamiento de la vida, sino á la acepción filosófica de la palabra, que, en concepto de un pensador ilustre, significa radicalmente una *marcha hacia adelante*. "El progreso es el movimiento hacia lo mejor; es el paso de lo que es menos perfecto á lo que es más perfecto, de lo que es más pequeño á lo que es más grande; es á la vez una expansión, una elevación y un perfeccionamiento. . . ."

Progresar, pues, quiere decir un *hacer* constante, no un *dejar* constante.

incógnita en imitar esos ejemplos y puedan llegar á convertirse en *avoz* del pueblo que los encumbra. Pero como las masas populares tienen que mirar con profunda aversión á los usurpadores de sus derechos, y la tolerancia tiene un límite, fácil es comprender por qué no se puede, todavía considerar á Panamá como una excepción de las repúblicas centro y suramericanas en las cuales periódicamente se producen revueltas que las hacen retrogradar enorme trecho en la senda del progreso.

Mientras sean posibles en Panamá los atentados del Poder contra el derecho de los ciudadanos, mientras sea posible el olvido de los principios esenciales de la República, serán igualmente posibles las turbulencias intestinas. Es absurdo suponer que un pueblo iniciado en los beneficios de la civilización, goce en la situación torrenciosa y aflictiva que la guerra trae consigo; la causa debe buscarse, pues, en la conducta de los que mandan, que son casi siempre quienes provocan esas cóleras.

El Gobierno Americano debe estar persuadido de esa gran verdad y también de que ni las amenazas de su fuerza inmensa, ni esa fuerza misma pueden ser poderosas á impedir la protesta indignada y extrema de los panameños, si los abusos y arbitrariedades de los gobernantes llegan á colmar la medida. La República no existe donde los ciudadanos no están seguros del ejercicio de sus derechos, ha dicho un pensador americano, y es inevitable, agregamos nosotros, que en determinadas circunstancias los ciudadanos sientan la necesidad incontestable de hacerse á sí mismos justicia.

Hablamos serenamente, no como caudillos de ninguna causa, que no lo somos, sino como observadores atentos de los hombres, de las cosas y de las enseñanzas de la historia.

Hasta ahora el Gobierno americano no ha oído de los panameños de la oposición sino el recuento de las numerosas y enormes faltas cometidas por el Gobierno con motivo de las elecciones recientes, la invocación á los impecaderos principios de la justicia y de la moral política y la excitación á que se decida á afianzar el bienestar y la tranquilidad de este pueblo. Se le ha hecho ver que su disposición de ahogar en sangre las rebeldías de los istmeños impone correlativamente el deber de influir para que no se produzcan las causas de esas rebeldías.

Pero ellos no han podido entender el fin práctico de esos discursos en que no se habla de *su negocio*; han visto claramente que las guerras en el Istmo les dañan de modo directo y se contentan con decretar la supresión de las guerras. Pero preciso es que ahonden en el asunto y vean que los disturbios armados siempre pueden producirse, en tanto que subsistan los actos y los hechos que los originan, y que si aquéllos pueden causar daño á los intereses y propiedades americanas, los responsables no son los ciudadanos que se lanzan airados á la revuelta, sino los que fríamente, por realizar planes ambiciosos, los provocan á ella.

Fácil es por otra parte demostrar al Gobierno americano que ejercitando la facultad de restablecer—y quien dice restablecer, dice mantener—el orden constitucional en esta República, se ahorra esfuerzos, y disgustos, y hombres, y dinero, todos esos elementos que serían necesarios para restablecer la paz ó el orden público; porque la paz nunca se turbará en este país, amante de su tranquilidad y ansioso de su progreso, si cada ciudadano pudiera disfrutar sosesadamente de las garantías y los derechos que la Constitución les reconoce y que tendrían amparo dentro de un orden constitucional bien cimentado. Para asegurar el orden constitucional en el Istmo bastaría la acción diplomática de los Estados Unidos, talvez enérgica al principio, por el espesor de las raíces que van desarrollando ciertos abusos, pero de todos modos acción pacífica y civilizada, que no costaría á los Estados Unidos ni un céntimo, ni la vida ó la salud de un solo hombre. Estamos seguros—y lo decimos para ilustrar nuestro aserto con ejemplos—estamos seguros de que no sería siquiera necesaria la protesta, sino una culta censura, para que el Poder Ejecutivo de este país se abstuviese en adelante de nombrar para los puestos de la Corte Suprema á personas que no reúnen los requisitos que la Constitución exige, y esa misma censura sería suficiente para que no volviesen á repetirse las escenas escandalosas en que fueron actores y protagonistas del Gobierno, instruidos para estrangular el derecho del sufragio.

Esas ventajas no ofrece la empresa de restablecer la paz pública, que presupone un estado de guerra en que hay insurgentes que tienen armas, y en que las convulsiones sociales producen males y se han acrecentado los males.

al cual por la ligereza con que han considerado el asunto.

La *libertad*—entendida espiritualmente á los Estados Unidos por la Constitución de Panamá son mucho más amplios y propenden á efectos de mayor trascendencia que los de la empujante Platt de la Constitución de Cuba, que no tiende, en nuestro sentir, sino á hacer imposible en aquella República el reinado de la anarquía, por virtud de la intervención americana. Acá hemos aspirado á más que eso: á que los Estados Unidos tomen á su cuidado la marcha regular de las instituciones republicanas que nos hemos dado; que así como pueden reprimir los alzamientos y las rebeliones armadas, por su derecho á restablecer la paz pública, puedan también, por su facultad de restablecer el orden constitucional, evitar la causa más común de las insurrecciones, manteniendo el poder público del Istmo en el cañil de una estricta legalidad, por su protección á los derechos imprescriptibles del ciudadano, por su respeto á los principios fundamentales de la República, en una palabra, por la fidelidad con que presida al ordenado desarrollo de la Constitución acatada unánimemente en el país.

Comprendemos el escrúpulo no razonado que puede arredrar á los Estados Unidos para ejercer en esta pequeña República una jurisdicción tan vasta como la que implica, en nuestro concepto, el artículo 136 de nuestra Constitución, que casi anula la soberanía reconocida á la Nación panameña, principalmente en esta época histórica, en que los Norteamericanos están empeñados en demostrar á sus hermanos del continente que no quieren territorio, sino el propio de ellos, ni quieren soberanía sino sobre ellos mismos. (*) Pero nosotros estimamos, no obstante eso, que en lo relacionado con Panamá, los Estados Unidos y nosotros estamos en el deber de tomar las cosas como son, porque hay consideraciones muy elevadas que fuerzan á ello.

Es de presumirse—y así es en efecto—que las disposiciones de la Constitución política de un Estado son fruto de la meditación de sus legisladores y que antes de ser adoptadas pasan por el crisol de debates prolongados y patrióticos en que se depuran y perfeccionan y por eso vienen á sintetizar el sentimiento y la voluntad general de los hijos de la nación. El artículo 136 de la Constitución panameña no ha sido una excepción de esa regla; él expresa con fidelidad lo que el pueblo panameño necesita y desea. Por qué ha de vacilar, pues, el Gobierno de Estados Unidos en aceptar y desempeñar una misión que se la ha confiado con plena espontaneidad y deliberación, porque se considera necesaria á nuestro bienestar político?

El artículo fue propuesto en la Convención Nacional por el doctor Manuel Amador Guerrero, quien ya había sido elegido Presidente de esta República ó sabía que había de serlo. El proponente tenía sin duda frescos en la memoria los sucesos deplorables que acontecieron hace pocos años en Colombia, donde un Presidente constitucional, el doctor Manuel Antonio Sanclemente, por la peregrina razón de que era demasiado viejo, fue depuesto de la Presidencia, á pesar de su protesta, con violación escandalosa de la Constitución y las leyes, por un partido descontento, que lo reemplazó con el Vicepresidente. Semblante proceder fué un atentado contra el orden constitucional establecido en aquella nación y un ejemplo funesto que el doctor Amador tenía interés en hacer de imitable repetición en Panamá. Por eso el artículo 136 de la Constitución panameña no habla sólo de la paz pública, sino también del orden constitucional. El autor del artículo y la mayoría de los Convencionistas pudieron tener en mira quizá únicamente el evitar caso igual ó semejante al que hemos mencionado; pero es evidente que el orden constitucional comprende muchas cosas, hechos, órganos y funciones de la vida nacional, y tal como quedó redactado el artículo se encuentra al interpretar el sentido amplio que tras él le hemos asignado.

Existe además la poderosa razón de que un gran número de los hombres dirigentes del Istmo están profundamente contaminados con hábitos perniciosos de desmoralización política que aquí establecieron, en larguísimo período, los gobiernos enfermos de Colombia, de la cual dependimos hasta hace poco; se ha perdido ó no ha creído en ellos la devoción sincera que las prácticas republicanas, de que los entusiastas apóstoles y defensores los ciudadanos de la América del Norte. De ahí proviene que al escapar el poder individuos que han podido poseer impunemente los principales cargos sagrados de la República, contra un provecho personal para los que los ocuparon, no sientan temor ni

que el poder del Estado esté por el momento en manos de un individuo.

atribuiría a restablecer los sentimientos de cordial fraternidad, que deben existir entre los miembros de una misma familia.

Pero en cuanto á la exigencia expresada en el artículo séptimo de que Panamá se comprometa á recibir en su territorio el derecho alguno los productos colombianos, tal pretensión nos parece del todo inadmisibles:

1.º Porque ese privilegio se opone á la conveniencia de mantener una tarifa igual para todas las naciones á fin de que sus productos vengán á competir en los mercados de este país, y el pueblo istmeño aproveche los beneficios de la concurrencia.

2.º Porque la exención de derechos á los productos de Colombia sería un golpe de muerte para la agricultura del Istmo. ¿Cómo podrían los agricultores istmeños competir con los productos de Colombia, si estos les pagan sus operarios con papel y los panameños pagan los suyos con plata?

Es un hecho universalmente reconocido por los economistas que la cuantía del jornal es el factor principal que decide el precio de todo producto, tanto en la industria como en la agricultura.

En la fabricación de un pañuelo de seda de fino ó de algodón, la materia prima representa ni la décima parte del valor del pañuelo; es la mano de obra la que constituye el importe del artefacto.

En la producción de un quintal de café sucede igual cosa: si un agricultor paga á sus operarios un jornal de 50 centavos plata, y otro les paga 50 centavos oro, claro es que el que paga el jornal en plata podrá vender su café por la mitad del precio del que lo paga en oro.

¿Cómo podrá entonces el agricultor panameño que paga á sus operarios un jornal de un peso plata competir con el agricultor colombiano que paga los suyos con papel al diez mil por ciento?

Imposible: conceder esa exención de derechos á los productos colombianos sería, por tanto, matar el porvenir agrícola del Istmo, porque Colombia inundaría estos mercados con productos infinitamente más baratos, mientras su papel permaneciera depreciado.

Además: esa exención de derechos vendría á menoscabar la Hacienda Pública del Istmo, porque ésta dejaría de percibir la renta que le produce la importación de substancias alimenticias.

Finalmente, esa exención daría origen á infinitos abusos, porque ¿cómo podría Panamá averiguar la procedencia de todo lo que los comerciantes del Cauca, de Boyacá y el Magdalena introdujeran al Istmo como productos de Colombia? El Cauca, por ejemplo, podría importar á Panamá libres de derechos todos los productos de la costa del Pacífico, sin que las autoridades istmeñas pudieran descubrir el fraude.

Por tanto, la exención de derechos á que se refiere el artículo séptimo del proyecto en referencia es una pretensión absurda é inadmisibles. Bien se ve que los autores de ese proyecto dicen lo que piensan, pero no piensan lo que dicen.

La prudencia y el patriotismo aconsejan de consuno á los panameños que deseamos de veras el engrandecimiento moral y material del terruño, la derogatoria simple y llana del artículo 49 de la Ley 65 de 1904, á fin de que los tratados que se estén negociando ó se van á negociar con Colombia queden, como cualesquiera otros celebrados con otras Potencias, sometidos á la sanción de la Asamblea Nacional de Panamá.

J. A. H.

Una Convención Internacional

No ha mucho, como es sabido, sobrevino una controversia entre los Gobiernos americano y panameño con motivo de la inteligencia y aplicación del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, sobre apertura de un Canal marítimo á través del Istmo de Panamá. Puso fin á esa controversia, también como es sabido, la *Orden ejecutiva* de 3 Diciembre de 1906, expedida en esta capital por el honorable William H. Taft, Secretario de Guerra de los Estados Unidos.

Esa orden dió solución á los tres puntos controvertidos: *puertos, aduanas y correos*. Pero aparte de esos tres puntos esenciales del Tratado hay otros que requieren pronta solución, entre los cuales figura en primer término la vinculación de relaciones entre los poderes judiciales de la Zona del Canal y del resto de la República de Panamá, en términos que propendan á facilitar la marcha de la administración de justicia en uno y otro territorio. Para llegar á ese resultado se impuso la condición de una *Convención Internacional* del Tratado

sobre apertura del Canal, esa Convención deberá concluirse, en mi concepto, mas ó menos en los siguientes términos:

Los Gobiernos de las Repúblicas de los estados Unidos de América y Panamá, teniendo en cuenta la necesidad inaplazable de llenar algunos vacíos que en la práctica se han notado en las estipulaciones del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, especialmente en lo relativo al ramo judicial; y mutuamente animados del deseo de remover toda dificultad que pueda perjudicar los intereses sociales vinculados en la Zona del Canal y en el resto de la República de Panamá, han acordado fijar en una Convención adicional al referido Tratado las reglas á que deban ajustarse su conducta las autoridades y Tribunales de la República de Panamá en materia Judicial. Al efecto los dos Gobiernos nombraron sus respectivos representantes, así:

El Presidente de los Estados Unidos de América á su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en esta capital, y

El Presidente de la República de Panamá al señor Secretario de Estado en el Despacho de Gobierno y Relaciones Exteriores.

Los representantes, después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que hallaron en debida forma, han acordado las siguientes estipulaciones:

Artículo I.

Los Tribunales de Justicia de la República de Panamá continuarán conociendo de los juicios civiles iniciados ante ellos antes de la ratificación del Tratado Bunau-Varilla-Hay, hasta que dicten sentencia firme con fuerza de cosa juzgada, aunque esos juicios versen sobre asuntos cuyo conocimiento corresponda actualmente, por cualquier causa, á los Tribunales de Justicia de la Zona del Canal.

Artículo II.

Los juicios que al tiempo de la entrega de la Zona del Canal al Gobierno de los Estados Unidos cursaban en los Juzgados Municipales de Emperador, Gorgona, Buenavista y Gatún, continuarán tramitándose los respectivos Jueces hasta su fenecimiento definitivo, aunque las personas contra quienes se dirijan se hallen actualmente domiciliadas en territorios jurisdiccional de Panamá.

Artículo III.

Las sentencias proferidas por Tribunales panameños sobre inmuebles situados en la Zona del Canal ó que de algún modo afecten, transfieran ó graven tales inmuebles tendrán fuerza de cosa juzgada en dicha Zona y serán ejecutadas por los Tribunales de ella. En consecuencia no tendrá aplicación respecto de las referidas sentencias el principio del *forum situs*.

Artículo IV.

Las autoridades y Tribunales de la Zona del Canal y las autoridades y Tribunales de la República de Panamá darán mutuamente entera fé y crédito á los actos públicos, registros, procedimientos y sentencias judiciales de unos y otros.

Artículo V.

Las autoridades y Tribunales de la Zona del Canal complirán y harán que se cumplan y ejecuten los mandamientos ó providencias que en asuntos civiles dicten las autoridades y Tribunales de la República de Panamá aunque recaigan sobre embargos, emplazamientos, citaciones etc.; y de la misma manera procederán las autoridades y Tribunales de la República de Panamá con respecto á los mandamientos ó providencias sobre asuntos de la misma naturaleza que emanan de las autoridades y Tribunales de la Zona del Canal.

Artículo VI.

Los exhortos que libren las autoridades y Tribunales de la República de Panamá relativos á la práctica de pruebas en la Zona del Canal, y los que libren las autoridades y Tribunales de ésta para obtener pruebas en territorio jurisdiccional de la República de Panamá serán cumplidos por unos y otros como si emanaran de autoridades y Tribunales de una misma jurisdicción.

Artículo VII.

Quando ocurriere el caso de que individuos residentes en la República de Panamá ó en la Zona del Canal tuvieran que entablar acción judicial sobre bienes inmuebles que estén situados parte en la Zona y parte en la jurisdicción de Panamá, conocerá de la causa el Juez ó Tribunal del lugar donde está situado la mayor parte de los bienes de que se trate.

Artículo VIII.

Los juicios en que los Tribunales panameños se hayan declarado impedidos para continuar su conocimiento y que por lo mismo hayan pasado á los Tribunales de la Zona del Canal deben adelantarse allí hasta su terminación.

Artículo IX.

En el caso de fallecimiento de panameños en la Zona del Canal dejando en ella todos ó la mayor parte de sus bienes, el respectivo juicio de sucesión se llevará á efecto con intervención de un Agente del Ministerio público de la República de Panamá, así: si el juicio se radicare en alguno de los Distritos de Ancón, Emperador ó Gorgona, intervendrá el Fiscal del Circuito de Panamá, y si se radicare en Cristóbal, Gatún ó Buenavista intervendrá el Fiscal del Circuito de Colón.

La intervención protectora del Ministerio Público en estas causas no será otra cosa que la que correspondería al Cónsul panameño en la Zona; si la existencia de ese funcionario fuera posible allí.

El Ministerio Público, en el ejercicio de su intervención, tendrá en cuenta, por analogía, el principio del tratamiento de la Nación más favorecida.

Artículo X.

La presente convención principiará á regir desde la fecha de su cange y durará en vigor indefinidamente. Las altas partes contratantes podrán modificarla, adicionarla ó sustituirla por mutuo acuerdo, según lo exijan las necesidades sociales.

En fe de lo cual etc. etc.

Oportuna me parece la ocasión para realizar esa medida de positivo interés público, ya que la Asamblea Nacional, que es la llamada á aprobar ese pacto por parte de Panamá, se reúne en esta fecha.

DANIEL BALLÉN.

Sueltos

A los constitucionales conservadores

les interesa meditar y meditar hondadamente lo que acerca de la enseñanza religiosa dice una hoja que trae la mira elevada de velar incurablemente "por los intereses del pueblo, encarnados hoy en el partido constitucional.—Dice el periodista citado:

"Tratar de enseñar una misma religión á hijos de individuos que profesan diversos cultos, pretextando que esas creencias son las que sigue la mayoría del Estado, es imponerlas, como si estuvieran investidas de carácter oficial....."

Los Hermanos Cristianos, como únicos regentes de nuestras escuelas públicas, son un anatema lanzado á la constitución:

"Opinamos con la enseñanza popular cuando es yramente laica."

"Los planteles de educación no pueden ser claustros en donde se preparen, como antes se hacía, en la obediencia pasiva, fieles para la iglesia y el Soberano, deben ser escuelas de educación moral y cívica."

¿Los constitucionales conservadores, seran ya, en el particular, de la misma manera de pensar y obrar que sus copartidarios de hoy?

El silencio, en este acaso, acusará complicidad.

Continúa

la Provincia de Chiriquí en un estado de inseguridad que podrían envidiar muy bien los pueblos más salvajes de la tierra. Hemos denunciado en este periódico hechos concretos y nos hemos referido en distintas ocusiones, con nombres propios, á los empleados prevaricadores y nadie, que sepamos hasta ahora, ha procurado atenuar siquiera situación tan vergonzosa como insostenible. En Gualaica un Alcalde estúpido y cobarde tiene á los habitantes del Distrito en tal grado de desesperación que nada tiene de particular que cualquier día, agotada ya la paciencia, los gualaquenos hagan un escarniento que puede resultar doloroso pero que ya es, si se quiere, necesario. *Has gracias* que cuentan del famoso Aizprúa, Alcalde de David, no tienen antecedentes en los anales de aquellos pueblos. Ese *Alcalde* moribundo se ha retirado donde él manda los ciudadanos carecen de derechos y garantías: Salvador Gómez, Alvaro de Buitrago es un criminal escapado que si fuera á

juzgársele por los delitos que ha perpetrado á mansalva casi siempre, bien podría echarse encima todo el Código Penal.

Qué dirá don Ricardo Arias de todo esto? Permitirá él que las Alcaldías de Chiriquí continúen en manos criminales é ineptas? Causa horror nada más pensar en las responsabilidades que el actual Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores está amontonando sobre sus hombros. Parece mentira que haya quien pudiendo evitar desgracias y males sin cuento se encoja de hombros y deje salir el sol por Antequera.

Otra campaña más y llegó á Sargento

es frase que se atribuye á D. Julio Arboleda, quien fue no sólo insigne poeta, sino insigne orador é insigne militar. Cuentan que siendo Coronel de la república, el doctor Mariano Ospina Rodríguez, Presidente de la Confederación Granadina, le envió el despacho de Teniente Coronel y á la vez lo destinaba al Magdalena á servir bajo las órdenes del Intendente Vieco. En esa ocasión, y contemplando el nombramiento militar que se le hacía, dicen que Don Julio lanzó la frase que sirve de epígrafe á estas líneas.

Don José Domingo de Obaldía, á raíz de nuestra incruenta secesión y hasta hoy ha negado su complicidad en ese acto histórico y trascendental. Como hombre de honor y ligado por juramento á mantener la integridad de Colombia él habría aprehendido aún á su mejor amigo y á todos los conspiradores si hubiera sabido lo de la conspiración. Eso dicen los hechos y eso hay que creer y repetir en honor de Don José Domingo.

Con todo esto, los que lo aclaman como candidato *constitucional* para Designado en el próximo período constitucional, le espentan, á modo de elogio, lo siguiente:

"Si él no hubiese simpatizado con el movimiento salvador de 3 de Noviembre, éste habría fracasado y no se registrara en la Historia con caracteres indelebiles....."

Y el mismo biógrafo repite:

PROCESO ELECTORAL

PROTESTA

(Continuación).

Nosotros, los suscritos, vecinos de los distritos de David, Dolega y Gualaica, protestamos una vez más de los atropellos de todo género de que han sido víctimas los pueblos de la Provincia de Chiriquí, al hacer uso del derecho de sufragio en las elecciones últimas; atropellos que obligaron forzosamente á los partidos coaligados para evitar desgracias y burlas que se veían venir, á abstenerse de votar el domingo primero de Julio, á pesar de la abrumadora mayoría con que contaban y á pesar también de haber quedado demostrada esa mayoría en las elecciones verificadas el 24 de Junio.

J. R. Lastra, Enrique Vásquez, Gregorio Moreno, Benigno Moreno, Belisario Vega, Enrique Acosta, Miguel Acosta, Cristino Acosta, Calixto Valdéz, Faustino de Gracia, Anastasio Barria, Andrés Almengor, José de Gracia, Gregorio Araúz, Anselmo Guerra, Julio Castillo, Federico Castillo, José Corella Acosta, José Cáceres, Aurelio Cáceres, Dionicio Montenegro, J. A. Tribaldos, Anibal Moreno, Pedro Ortiz, Eduardo Hernández, Pablo Abrego, Salvador Cerrú, Ricardo Cerrú, Evaristo Cerrú, Santana Casasola, José del Carmen Casasola, Leandro Casasola, Demetrio Casasola, Agapito Casasola, Anselmo Urriola, Anselmo Cerracín, Bernardo Montenegro, Ambrosio Navarro, Bacilio Sánchez, Alejandro Sánchez, José de la C. Piti, Pablo Rangel, Nicolás Navarro, Calixto Valdéz, José Ríos, Fermín de Gracia, Demetrio Tapia, Tomás Ríos, Asunción de Gracia, Bacilio Almengor, Francisco Navarro, José Navarro, Irene Castellón, Francisco Acosta, Ignacio Rangel, Victoriano Castillo, Miguel Hernández, Antonio Castillo, Francisco Almengor, Lorenzo Miranda, Eligio Almengor, Marcos Contreras, Agustín Navarro, Carlos Vargas, Ricardo Vargas, Julián González, Florentino Castillo, Gertrudis Navarro, Sebastián Vergara Vega, Manuel Navarro, Agapito Grubio, Genaro Navarro, Esteban Torres, Quintín Contreras.

(Continúa)

"Para decir todo en favor de nuestro candidato, réstanos decir que si él no hubiese desempeñado las funciones de Gobernador del extinguido Departamento, el 3 de Noviembre no se contaría en el Calendario de nuestras fechas gloriosas."

Si el señor de Obaldía no estuviera tan lejos, en Río Janeiro, y pudiera leer oportunamente lo que de él dice su desinteresado biógrafo, para diando á Arboleda diría:

—Otro elogio como ese, y matar mi candidatura!

Sigue

para David nuestro apreciable é inteligente amigo don Manuel Antonio Palacios,

Que las olas le sean propicias, que á su regreso venga con renuevos de energías, para ejercitarlas en el trabajo que es su campo favorito, y en la lucha por el desenvolvimiento de la verdadera República, que es su ideal en política.

Estos son nuestros deseos.

Las conspiraciones

Siguen á la orden del día, según cuentan y confirman los movimientos de los agentes de policía armados, ora redoblando las guardias del Palacio Presidencial y del cuartel de los mismos ya haciendo patrullas nocturnas.

—¿Qué hay de conspiración?—decía ayer un constitucional de nacimiento á otro de corazón.

—Nada: lo que dijo el poeta.

—¿Qué poeta?

—Gaspar Núñez de Arce.

—¿X qué dijo Núñez de Arce?

—Oiga usted:

¡Conciencia, nunca dormida,
mudo y pertinaz testigo,
que no deja sin castigo
ningún crimen en la vida!
La ley calla, el mundo olvida!
Mas, ¿quién sacude tu yugo?
Al Sumo-Hacedor le plugo
Que á solas con el pecado,
fueses tú, para el culpado,
delator, juez y verdugo.

TIPOGRAFIA MODERNA

Antigua Chevalier, Andreve & Cía.

AVENIDA CENTRAL. NUMERO 37

LA MEJOR DE LA REPUBLICA
Cuenta con materiales modernos y obreros inteligentes y activos. Especialidad en la impresión de

- **LIBROS Y FOLLETOS** -

TODO TRABAJO GARANTIZADO
Libros de recibos de alquiler á UN PESO el ejemplar.

"LA MASCOTA"

CARLOS W. MULLER-Plaza de la Catedral

Constante y renovado surtido de los afamados vestidos

Kirschbaum

Unica agencia del universalmente conocido calzado

Douglas

La juventud elegante de Panamá
no puede prescindir del uso de
los artículos para hombres que

"La Mascota"

realiza siempre de clase inmejorable á precios módicos y en inmensa variación de estilos.

Serán inmediata y cuidadosamente despachados bajo encomienda postal, los pedidos que se reciban del

Interior de la República

cuyo peso y volumen no exceda del admisible en la oficina de Correos.

FRANK ULLRICH & Co.

Licores, provisiones y cigarros.

VENTA POR MAYOR Y MENOR

PRECIOS MODICOS.

EL HERALDO del ISTMO

REVISTA ILUSTRADA

Director: Guillermo Andreve.

La única publicación literaria del país
Suscripción por trimestre:

DOS PESOS PLATA.

PAGO ADELANTADO

Avenida Central No. 37-Apartado 54.

A la Ville de Paris

Nos parece Pálido el calificativo de Superior á las novedades que acabamos de recibir, pues mejores no las hay é igualarlas es difícil

Flores Artificiales

CINTAS-Cuellos de fantasía para señoras y Cinturones de Cabritilla

CORSES DE WARNER

Medias de Hilo Caladas y Lisas. Trajes medio confeccionados
(Algo enteramente nuevo en esta plaza)

Vestidos forma marinera para niños y niñas. Trajes de Baño para Señoras, Caballeros y Niños. Una interesante colección de Encajes de lino á precios incompatibles. Un completo surtido de Blusas Blancas y de Colores.

H. de SOLA & Co.

Panamá. Agosto 4 de 1906.

Almanaque
Istmeño

PARA 1906

De venta en la

Tipografía

MODERNA

La Empresa
de Fontanería
Higiénica de
Bravo y Brin



The BRAVO-BRIN
PLUMBING Co.

Avisa á su numerosa clientela y al público en general que ha trasladado su oficina á la

CALE 5^a

entre las Avenidas CENTRAL y A., casa número 26, conocida generalmente con el nombre de "casa de la familia Cooke."

Y como de costumbre se encarga de toda clase de instalaciones de fontanería en la

CAPITAL Y EN LA LINEA DEL FERROCARRIL,

garantizando buen trabajo, rapidez y precios sin competencia,

DENTRO DE LA BUENA CALIDAD

The Panama
Plumbing Co.

Hace toda clase de instalaciones de fontanería moderna, de acuerdo con las Ordenanzas que estipula el Departamento de la

Comisión Istmica, á precios

completamente Módicos.

Para pormenores ocúrrase á la

Avenida Central No. 31.

35 y 33. Oficina General

HEURTEMATTE & Co.

Bazar Francés

Casa más antigua
en el Istmo

Unicos Agentes en el Istmo

Jules Robin. Cognac-Société Française d'Alliage de Metaux. Cubiertos y Cuchillos, Cristalería de Baccarat.

Aseguros marítimos franceses.

Constante surtido de mercancías secas de todas clases y artículos de fantasía.

PRECIOS FIJOS

TODO ARTICULO GARANTIZADO